

La protesta condena al Estatuto manchego a un difícil futuro en su tramitación parlamentaria



J. S. / REDACCIÓN La manifestación de Murcia condena a permanecer la reforma estatutaria en la vía muerta en la que se encontraba. Aprobado en el Parlamento castellano-manchego por unanimidad, con los votos del PSOE y del PP, el Estatuto puede encallar definitivamente en el Congreso de los Diputados. La Comisión Constitucional debe reunirse el próximo 1 de abril para debatir las propuestas de reforma de estatuto. Sin embargo no se descarta que acuerde su remisión a las Cortes de Castilla-la Mancha, que podrían adelantarse y pedir la retirada del texto legal. Desde hace unos días, PSOE y PP trabajan más en cómo salir indemnes del callejón sin salida en el que se encuentran que en buscar fórmulas mágicas.

Ni siquiera la descafeinada propuesta basada en aludir en el preámbulo a que el trasvase "podría" ser innecesario a partir de 2015 y pedir más participación de la Junta de Comunidades en los órganos de gestión del agua parece ahora mismo viable. La comisión nació el 11 de marzo sin acuerdo y con una advertencia del secretario general socialista Ramón Jáuregui que tras la manifestación y el claro apoyo de los socialistas regionales a la misma cobra un sentido más profundo si cabe: "No buscaremos una mayoría alternativa" -que deje al margen al PP-, anunció, dando por hecho un apoyo unánime de sus diputados que tras la manifestación parece poco seguro.

Ayer prácticamente nadie quería hablar de la manifestación y de sus consecuencias. No lo hizo la vicepresidenta Fernández de la Vega, que se encontraba en Valencia, y la ministra del ramo, Elena Espinosa, desde Estambul, eludía pronunciarse directamente y sólo aseguraba a la agencia Efe que los españoles, independientemente de donde vivan, siempre han tenido garantizada el agua y la seguirán teniendo, "aun en condiciones de máxima sequía". Sólo el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel sacaba pecho tras la marcha: "La voz que se escuchó ayer en Murcia debe trascender fronteras y ser escuchada por quien realmente tiene que escucharla, que es quien tiene la competencia para acabar con esta pesadilla, el Gobierno de España".

Por su parte, el secretario general del PSOE en Murcia, Pedro Saura, anunció ayer su intención de trasladar al PSOE y al PP en el Congreso de los Diputados "el clamor y la unidad de todas las fuerzas políticas y de todos los ciudadanos del Levante español en defensa del Trasvase Tajo-Segura". Saura trasladará también al Congreso la exigencia de que "no haya en el Estatuto ni una sola referencia, ni una sola palabra, que afecte a la permanencia de esta histórica infraestructura".